

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente **Moción, consecuencia de Interpelación urgente**, sobre el impacto de las políticas del Gobierno sobre la fortaleza del Estado y la convivencia constitucional.

Madrid, 21 de marzo de 2024

Fdo.: Miguel TELLADO FILGUEIRA

PORTAVOZ

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El informe de la Comisión de Venecia ha puesto en evidencia las múltiples grietas de la ley de amnistía que, vehiculizada como proposición de ley del Grupo Socialista, impulsa el Gobierno de España.

A pesar de ello, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes insiste en que la Comisión de Venecia avala la ley de amnistía. Ha llegado a afirmar que el informe de la Comisión asegura que la ley es constitucional. Esto ha sido desmentido categóricamente por el propio portavoz de la Comisión, cuando señala que en ningún caso les compete valorar la constitucionalidad del texto.

Esta no es la única tergiversación o bulo que Gobierno insiste en propagar sobre la ley de amnistía y sus acuerdos con las personas y partidos que promovieron el golpe Estado de 2017:

- El Gobierno insiste en la falacia de que la ley de amnistía persigue la convivencia y la reconciliación entre españoles, lo cual es manifiestamente falso. Así lo demuestran las nítidas, tajantes y explícitas advertencias expresadas por los principales beneficiarios de la ley, antes, durante y después de su aprobación. Sirva de ejemplo el propio secretario general de Junts, el señor Jordi Turull, que manifestó: “volvería a hacer el 1 de octubre y lo haría mejor”
- La ley de amnistía supone un ataque frontal tanto a la letra como al espíritu de la Constitución Española. Así lo han advertido desde los padres de la Constitución, juristas de reconocido prestigio, instituciones, académicos, etc....

A esto se añaden, señaladamente, tres informes:

- El informe de los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso. Juristas expertos que estudiaron a fondo el texto.
- El informe de los letrados del Senado.

- El informe aprobado por la mayoría del CGPJ.
- Todos coinciden en que la ley es manifiestamente inconstitucional.

Concretamente, la Comisión de Venecia en su informe sobre la Proposición de Ley de amnistía, denuncia los siguientes aspectos:

- Es tan divisiva que su aprobación exigiría no ya una mayoría absoluta, como ley orgánica, sino una mayoría cualificada.
- No se debió tramitar por vía de urgencia y de forma atrabiliaria.
- En lugar de reducir el ámbito temporal, se ha ampliado sin mediar explicación alguna.
- No todos los delitos de terrorismo se han excluido, como se exigió.
- La amnistía no puede concederse a la carta de delincuentes concretos.
- Se amnistían delitos de malversación sin un nexo claro con el Proceso.
- Los jueces deben tener la última palabra, tanto en relación con la suspensión de las medidas cautelares como en la propia aplicación de la ley.
- Las comisiones de lawfare no deben tener ni siquiera el derecho a pedir la comparecencia de jueces en el Congreso.

Y añade algo más, de especial relevancia, en una nueva nota a pie de página: *“La Comisión Europea ha subrayado que la redacción actual del artículo 2.c significa que no todos los delitos de terrorismo tipificados por la Directiva UE 2017/541 sobre la lucha contra el terrorismo están excluidos del ámbito de aplicación del proyecto de ley de amnistía”.*

La Comisión Europea, el gobierno de la Unión, presenta sus observaciones a la Comisión de Venecia destacando la incompatibilidad de la amnistía con la directiva relativa al terrorismo. Manifestando que es contraria al ordenamiento jurídico europeo.

Es una ley contraria a la Constitución, como también han dictaminado los letrados del Senado y los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso.

Es una ley contraria al derecho europeo, como ha advertido la Comisión de Venecia y la misma Comisión Europea.

Es una ley fruto de una transacción corrupta, la impunidad para golpistas, corruptos y hasta posibles terroristas, a cambio del poder para quienes perdieron las elecciones.

Es una ley contra la reconciliación entre españoles, que supone la deslegitimación del Estado, la eliminación de la separación de poderes, el principio de igualdad, la exclusividad del poder judicial para impartir justicia, la implantación de una casta corrupta inmunes a la ley y la indefensión y el desamparo a los constitucionalistas en Cataluña.

Resulta imprescindible reclamar el cese inmediato en la campaña de acoso y presiones a los jueces que están instruyendo causas relacionadas con los separatistas con la vana e imposible esperanza de que renuncien a cumplir con sus obligaciones.

Es necesario cumplir con las conclusiones del dictamen del Parlamento Europeo aprobado el 19 de marzo, que exige a las autoridades autonómicas y nacionales la adopción de las medidas necesarias para garantizar en Cataluña el derecho a la educación en lengua materna ya sea en catalán o en castellano, garantizando el uso de ambas lenguas como lengua vehicular en la educación bajo un principio de equilibrio.

Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1- Solicitar la retirada, de manera inmediata, de la Proposición de Ley de Amnistía por manifiestamente contraria a la Constitución y al Derecho Europeo.

2-Cumplir y exigir a la Generalitat de Cataluña el cumplimiento del dictamen aprobado por el Parlamento Europeo el pasado 19 de marzo de 2024 sobre el modelo lingüístico en Cataluña.

3- Respetar las actuaciones judiciales que se están llevando a cabo en relación con las actividades presuntamente delictivas en torno al Procès y acatar las resoluciones judiciales que se adopten y que afecten a quienes huyeron de España para eludir la acción de la justicia.

4- Comparecer en las Cortes Generales para rendir cuentas de las negociaciones que se están llevando a cabo dentro y fuera de España con los representantes de las fuerzas políticas independentistas.

5- Rechazar la propuesta de autonomía fiscal y financiera planteada por los independentistas, así como cualquier iniciativa que vaya en contra de los principios de solidaridad, lealtad institucional y colaboración entre comunidades autónomas, fundamento del modelo territorial diseñado en la Constitución Española.